

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

“Después del Golfo”

Michael Walter, *Guerras justas e injustas*

I

Las teorías políticas se ponen a prueba con los sucesos del mundo político. No se pueden comprobar de la misma manera que se evalúan las teorías científicas, por los hechos del mundo natural: los acontecimientos políticos no pueden ser observados ni con desafección ni con precisión; tampoco pueden ser observados en un laboratorio; y es difícil precisar de qué manera una teoría sobre la justicia distributiva, la obligación política o el propósito del castigo, pudiera ser refutada. Sin embargo, las teorías políticas pueden ser devaluadas y revisadas, y en este punto no hay ninguna diferencia radical entre la política y la naturaleza. ¿Puede la teoría ilustrar los hechos de la realidad? ¿Evidencia las problemáticas acertadas? ¿Es útil a la hora de configurar, justificar y explicar nuestros juicios y argumentos morales?

Desde la publicación por primera vez en 1977 de *Guerras Justas e Injustas*, se ha producido un renacimiento significativo de la teoría de la guerra justa – inducido principalmente, como sucedió con mi propio trabajo, por la experiencia de Vietnam-. Se han publicado muchos libros y artículos y se han impartido muchos cursos, no sólo en las escuelas de artes liberales sino también en las academias militares de Estados Unidos. El lenguaje de la teoría de guerra justa ha aparecido más frecuentemente en las discusiones públicas; en primer lugar, en los debates de disuasión nuclear, y posteriormente, en el debate que precedió la guerra en el Golfo. Nuestros líderes políticos y militares lo han asimilado y adoptado (una muestra de ello, la designación de la invasión de Panamá en 1989 como una Operación de Causa Justa, que probablemente no era). Éste es un momento peligroso para cualquier teoría, aunque también es obviamente el momento que los teóricos más anhelan. Piénsese en los efectos perversos, o bien divertidos, sobre la religión cada vez que el lenguaje de lo sagrado es utilizado por los políticos. Por supuesto, la política y la guerra no son nunca sagradas – por lo menos no tal y como yo entiendo lo sagrado – mientras que algunas veces, o hasta cierto punto, son justas. Sin embargo, sólo en ciertas ocasiones y en cierta medida, cuando se

proclaman las justificaciones más rotundas, la teoría se vuelve sospechosa. Si se puede utilizar para defender la injusticia, ¿acaso debería ser usada del todo?

En realidad, tanto si se adopta una terminología específica como si no se hace, la teoría de la guerra justa siempre ha jugado un papel en los argumentos oficiales sobre la guerra. Ningún líder político puede enviar soldados a la batalla, pidiéndoles que arriesguen sus vidas y que maten a otras personas, sin asegurarles que su causa es justa – y la de sus enemigos, injusta. Y si la teoría es utilizada, inevitablemente también puede ser mal empleada. En ciertas ocasiones, sólo sirve para determinar las mentiras que nuestros líderes dicen, la compleja estructura subyacente a su hipocresía, el tributo que el vicio paga a la virtud. No obstante, la teoría siempre está disponible para proporcionar un servicio alternativo. También puede desempeñar un papel fundamental, al preparar el terreno y concretar la demanda para lograr un tributo más honorable. Por esta razón, es importante no abandonar la teoría únicamente porque se ha hecho un mal uso de ella – al igual que no cambiaríamos nuestras ideas sobre la amistad sólo porque falsos amigos abusan de ellas.

El uso y mal uso de la teoría de la guerra justa muestra hasta qué punto ésta sigue siendo popular y estando vigente: gobierna lo que decimos e incluso lo que hacemos. La discrepancia siempre recurrente entre el discurso y la acción abre el camino para la crítica. De hecho, es ésta la forma corriente de crítica como práctica social: la aplicación de principios comúnmente aceptados a las políticas e instituciones que, cualquiera que sea su apariencia retórica, fracasan a la hora de mostrar que están a la altura. Una vez más, no siempre fallan o fallan del todo. La mayor parte de las guerras, como argumento en este libro, son justas únicamente en uno de los bandos (el lado que lucha en legítima defensa); entonces, algunos hechos de la guerra también han de ser justificables. El objetivo de esta teoría es ayudarnos a distinguir, prepararnos para la toma de decisiones políticas, para el trabajo diario de criticar o apoyar ésta o aquella guerra, o para tomar una decisión en tiempo de guerra.

II

Podemos tomar la guerra del Golfo Pérsico como caso de estudio. De acuerdo con el servicio que prestó ¿en qué medida sirvió la teoría? Curiosamente, algunos críticos de la guerra, en particular aquellos pertenecientes a diversas

comunidades religiosas, intentaron simultáneamente usar y desacreditar la teoría – usarla porque querían reivindicar que la guerra era injusta, y desacreditarla porque temían (o mejor dicho, eran muy conscientes) que, en los términos estrictos de guerra justa, ésta no lo fuera. Finalmente concluyeron con un argumento que, bajo mi punto de vista, es peligroso y erróneo: que ninguna guerra en el momento actual puede ser justa. Para ellos la teoría ha perdido su capacidad para hacer distinciones. Dados los recursos de un ejército moderno, dada la disponibilidad de armas de destrucción masiva, las viejas categorías no pueden llevar a cabo un trabajo serio. Sólo nos queda entonces una teoría de la justicia que es obsoleta y una práctica de la guerra que resulta obscena.

Ciertamente, es posible reinterpretar o reconstruir la teoría de la guerra justa de forma que ninguna guerra pueda ser justificada. Aunque es importante resaltar que aquí “no guerra” significa *no guerra pasada o presente*. La forma de guerra más masivamente destructiva es también una de las más antiguas: el asedio a una ciudad, en la que la población civil es el objetivo admitido y no se realiza ningún esfuerzo a la hora de discriminar a las víctimas. Aquellos oponentes a la Guerra del Golfo que apoyaron públicamente un bloqueo prologando de Irak no parecen haberse dado cuenta que, en realidad, estaban defendiendo un acto de guerra radicalmente indiscriminado con consecuencias dramáticas predecibles (véase la discusión en el capítulo 10 sobre el bloqueo de Berlín durante la Primera Guerra Mundial). La teoría de la guerra justa, tal y como yo la entiendo, requiere el abastecimiento de comida y medicamentos - aunque, en dicho supuesto, es improbable que el bloqueo pueda servir a su propósito-. En cualquier caso, no tenemos ninguna razón para pensar que hacer juicios de este tipo sea ahora más difícil de lo que lo era hace miles de años. Nunca ha habido una edad de oro de la guerra cuando las categorías de guerra justa eran fáciles de aplicar y en consecuencia aplicadas regularmente. En cualquier caso, la tecnología contemporánea hace posible luchar con una mayor discriminación ahora que en el pasado, si hay voluntad política para hacerlo.

A pesar de esto, es posible construir la teoría para que la distinción entre objetivos militares y objetivos civiles sea irrelevante. Y entonces, como veremos, se pierde también otra distinción: la que se establece entre la teoría de guerra justa y el pacifismo. La estrategia aquí es, entonces, poner un nuevo énfasis sobre dos máximas de la teoría: la primera, que la guerra debe ser “el último recurso” y, la segunda, que los costes anticipados tanto a soldados como a civiles no deben ser

desproporcionados (o mayores) con respecto al valor de sus fines. No discutí extensamente ninguna de estas dos máximas en el libro porque en 1977 no me parecían (como no me lo parecen en el momento actual), de gran ayuda a la hora de hacer distinciones morales importantes. Pero éste es en sí mismo un punto que requiere discusión, y la Guerra del Golfo ofrece en ambos casos la ocasión y la ilustración idónea de la inadecuación conceptual de las dos máximas.

Considérese primero la sucesión de los hechos, Irak invadió Kuwait a principios de agosto de 1990; la resistencia kuwaití fue breve e inefectiva, y el país fue ocupado en cuestión de días. Ese fue el principio, y podría haber sido el final de la guerra. Sobrevino un breve frenesí de actividad diplomática, cierta movilización estadounidense y la llegada de tropas de EEUU a Arabia Saudí. La diplomacia provocó un bloqueo económico a Irak, sancionado por Naciones Unidas, y reforzado militarmente por una coalición de estados, dirigidos y dominados por Estados Unidos. Aunque el bloqueo requirió muy poco refuerzo militar, fue técnica y prácticamente un acto de guerra. Pero la percepción general durante aquellos meses (desde agosto de 1990 hasta enero de 1991) fue que el Golfo estaba en paz mientras que la coalición trataba de revertir la agresión iraquí sin violencia, y debatía, a sangre fría y lentamente, si comenzar la guerra o no. Fue en el contexto de este debate cuando se planteó la cuestión del “último recurso”.

Si el ejército kuwaití, contra todo pronóstico, hubiese tenido éxito en mantener fuera a los invasores durante algunas semanas o meses, esta cuestión nunca habría surgido. La guerra habría sido el primer recurso de Kuwait dada la inmediatez y la violencia de la invasión; y cualquier estado aliado o amigo se habría adherido, apoyándole en su defensa, de manera legítima. El fracaso de la resistencia abrió un paréntesis temporal y moral durante el cual fue posible buscar soluciones alternativas al conflicto. El bloqueo fue sólo una de las alternativas existentes, que incluían la condena a Irak por parte de Naciones Unidas, su aislamiento político y diplomático, un cierto nivel de sanción económica, y un acuerdo negociado que suponía grandes o pequeñas concesiones al agresor. El bloqueo actual podría haber tomado distintas formas, de acuerdo con diferentes finales; por ejemplo, la coalición podría haber intentado la contención, y no la reversión de la agresión iraquí.

Entiendo que era moralmente obligatorio discutir estas posibilidades y sopesar las consecuencias posibles. Pero es difícil vislumbrar cómo de obligatorio

habría sido adoptar una de ellas, o una secuencia de ellas, simplemente para que la guerra fuese un último recurso. Si los aliados, sopesando las alternativas y sus consecuencias, una de las cuales era la continuación de la ocupación de Kuwait, hubiesen decidido en una fecha anterior (por ejemplo, en septiembre) un ultimátum – retirarse o enfrentarse a un contraataque – la decisión no habría sido injusta. Tendrían que haber considerado un intervalo de tiempo necesario para la retirada así como negociar sus características, y habríamos querido, además, cierta seguridad sobre las razones que conducen a pensar que las otras estrategias no habrían funcionado o lo habrían hecho con un alto coste para la población de Kuwait. Dado el intervalo y las razones, la doctrina del último recurso no parece desempeñar, en este escenario, un papel importante.

Tomado literalmente, que es exactamente la forma en que mucha gente lo entendió durante los meses del bloqueo, la máxima del “último recurso” convertiría la guerra en algo moralmente imposible. Porque no podemos nunca alcanzar la infinitud o no saber que la hemos alcanzado Siempre hay algo más que hacer: otra gestión diplomática, otra resolución de Naciones Unidas, otra reunión. Una vez que algo como el bloqueo está en marcha, parece posible esperar un poco más de tiempo y confiar en el éxito de (lo que parece pero no es del todo) la no-violencia. Asumiendo, sin embargo que, la guerra estaba justificada en primera instancia, en el momento de la invasión, resulta justificable en cualquier momento posterior, cuando los costes y los beneficios parecen, haciendo un balance, mejor que aquellos que presentan otras alternativas disponibles.

Pero enviar tropas a la batalla suele conllevar muchos costes no anticipados que conforman un umbral moral que los políticos deben cruzar con cierta reticencia y turbación. Ésta es la gran verdad que subyace en la máxima del “último recurso”. Si existen vías potencialmente eficaces para evitar la lucha mientras se sigue haciendo frente al invasor, se deben intentar. Durante los meses de paréntesis durante la crisis del Golfo, considero que se intentaron. La combinación del bloqueo económico, de la amenaza militar, y del ultimátum diplomático fue una estrategia plausible diseñada para provocar una rendición iraquí. La política y la guerra a menudo operan según calendarios de este tipo. Nuestro bloqueo de Irak no era un estado de sitio convencional, que se tuviera que mantener hasta que el hambre obligara a Sadam Hussein a rendirse. Estábamos comprometidos, y como he apuntado anteriormente, deberíamos haber estado comprometidos con el paso de comida y medicinas antes de que la gente empezara a morir en las calles –

aunque mucha gente hubiese muerto de todas formas, por los efectos provocados, a largo plazo, por la malnutrición y las enfermedades.

El bloqueo estaba dirigido fundamentalmente a la capacidad industrial militar. Pero Sadam podría haberla disminuido durante unos meses o incluso años, y así estar seguro de no ser atacado. Consecuentemente, la eficacia del bloqueo dependía de la amenaza creíble de lucha, y una vez organizada esta amenaza, no podía ser mantenida indefinidamente. En algún momento, los iraquíes tenían que ceder o la coalición tenía que luchar. De otra manera, la victoria habría sido suya: el triunfo de la agresión. Muchos observadores, haciendo uso de ésta o aquella versión de la teoría de la decisión racional, esperaban que Irak se rindiera antes del 15 de enero. Una vez que se vio que esto no sucedía, la guerra estaba absolutamente legitimada, aunque no como último recurso.

Sin embargo en este punto, la máxima de la proporcionalidad entra en juego, y aduce que la guerra no puede ser nunca legitimada en las condiciones contemporáneas porque sus costes serán siempre mayores que sus beneficios. Ciertamente, deseamos líderes tanto políticos como militares que se preocupen por los costes y los beneficios. Pero tienen que *preocuparse*; no pueden calcular, porque los valores que están en juego no son conmensurables -por lo menos - no pueden ser expresados matemáticamente o comparados, tal y como la máxima de proporcionalidad sugiere. ¿Cómo medimos el valor de la independencia de un país frente al valor de las vidas que se podrían perder defendiéndolo? ¿Cómo se cuantifica el valor de la derrota de un régimen agresivo (la invasión de Kuwait no era la primera, ni probablemente sería la última de las agresiones iraquíes) o el valor de derrotar a otro régimen similar? Todas las valoraciones de este último tipo saldrían perdiendo frente a la cuantificación de seres humanos, porque sólo las personas se pueden contar. Y entonces es imposible luchar guerra alguna excepto aquellas que prometen no derramar sangre, y no sólo en uno de los bandos. Ésta última postura es totalmente respetable – el pacifismo, no la guerra justa- pero cualquiera que la sostenga tendrá que aceptar y reconocer los resultados no pacíficos que se obtienen cuando se trata de acomodar estados como el Irak de Sadam Hussein.

Al mismo tiempo, ningún líder político en su sano juicio optaría por una guerra que supusiera millones, o incluso cientos de miles, de muertos o que amenazase al mundo con la destrucción nuclear, para defender la independencia de

Kuwait. Esta es la verdad que reside en la máxima de la proporcionalidad. Pero es una verdad burda, y aunque funciona en algunos casos como en la invasión de Checoslovaquia por parte de Rusia en 1968 (nadie sugirió en aquel caso una movilización militar como respuesta por parte Estados Unidos), no serviría como criterio en un gran número de casos. La mayor parte del tiempo, sólo podemos hacer predicciones a corto plazo, y no tenemos ninguna fórmula para hacer el ejercicio matemático de comparar los costes de luchar con los costes de no luchar, teniendo en cuenta que una de estas partes es necesariamente especulativa, mientras que la otra crece, tal y como ocurrió, durante un período de tiempo indeterminado. Si insistimos únicamente en que, dadas las armas disponibles en la actualidad, la lucha produce sin ninguna duda pérdidas catastróficas, la máxima de la proporcionalidad excluiría la guerra en éste y en cualquier otro caso; pero esta proporción es falsa.

Debemos preguntarnos en cambio qué armas van a ser usadas, cómo serán usadas y con qué fines. La teoría de la guerra justa tiene mucho que decir sobre todos estos temas, y lo que dice constriñe de muchas maneras. En cambio, cuando hay que resistir una agresión, la teoría es como poco permisiva, en algunos casos imperativa. Por algunas razones, abordadas profusamente a lo largo de este libro, actos de agresión como la invasión iraquí *han de ser resistidos* – no necesariamente por la vía militar-, pero de alguna forma. Aunque la vía militar puede desestimarse en la práctica, tanto en éste como en otros casos, porque es improbable su efectividad o porque es peligrosa, no se excluye por principio. Lo que resulta autoritario aquí, es el aborrecimiento de la agresión, frente a las máximas del último recurso y la proporcionalidad, que desempeñan un papel marginal e incierto.

III

Las guerras justas son guerras limitadas; su conducta está gobernada por un conjunto de reglas diseñadas para frenar, en la medida de lo posible, el uso de la violencia y la coerción contra las poblaciones no combatientes. El “control” de estas reglas, a partir del momento en que no está refrendado por ningún poder policial ni sistema judicial, es en amplia medida ineficaz, dado que no está respaldado con autoridad, aunque no del todo. E incluso si las reglas fallan en su cometido de determinar la conducta de *esta* guerra, a menudo logran dar forma a los juicios públicos sobre la conducta y también, quizás, al entrenamiento, al compromiso y a la conducta futura de los soldados. Si la guerra es una extensión

de la política, la cultura militar en una extensión de la cultura política. El debate y la crítica juegan un importante papel, aunque no determinante, a la hora de definir el contenido de ambas culturas.

En este punto existen dos tipos de límites cruciales, y ambos figuraban ampliamente en la defensa política y, posteriormente, en la crítica de la Guerra del Golfo. La primera está relacionada con la finalidad de la guerra, los propósitos para los cuales se lucha. La teoría de la guerra justa, tal y como es entendida habitualmente, persigue el restablecimiento del *status quo* anterior - la forma en la que se encontraban las cosas, es decir, la situación en la que se encontraba el país antes de que la agresión tuviera lugar – con una única condición adicional: que la amenaza del estado agresor en las semanas o meses previos al ataque no esté incluida en esta “restauración”. En consecuencia, la guerra tiene como objetivo legítimo, la destrucción o derrota, la desmovilización, y el desarme (parcial) de las fuerzas armadas del agresor. Excepto en casos extremos, como en la Alemania nazi, no pretende la transformación del sistema político del estado agresor o reemplazar su régimen. Para alcanzar fines de este tipo, sería necesaria una ocupación prolongada y una coerción masiva sobre los civiles. Más que eso: exigiría una usurpación de la soberanía, que es exactamente lo que condenamos cuando condenamos la agresión.

En el caso iraquí, la aceptación de este límite por la coalición desencadenó, después del alto al fuego, una guerra civil sangrienta, cuyas víctimas bien pudieron exceder las de la propia guerra. La máxima de la proporcionalidad probablemente habría dictado, desde un punto de vista militar, una rápida y no excesivamente costosa, expedición sobre Bagdad. Sin embargo, las guerras limitadas se rigen por la doctrina de la no intervención, que sostiene que los cambios de régimen deben resultar del trabajo de los hombres y mujeres que viven bajo dicho régimen – y que asimismo han de asumir los costes del cambio y los riesgos de los fallos-. La no intervención deja paso a la proporcionalidad sólo en casos de masacre o de hambrunas y epidemias inducidas políticamente, cuando los costes son imposibles de asumir. Entonces tenemos una justificación para actuar o, de manera más rotunda, se podría decir que debemos actuar (como los vietnamitas en Camboya con Pol Pot, los tanzanos en Uganda con Idi Amin, o los indios en lo que era el Este de Pakistán), sin miramientos hacia la idea de soberanía nacional. Primero, será difícil decir que no deberíamos haber intervenido y estar seguros de que el lado “correcto” ganó la guerra civil iraquí, y segundo, que deberíamos haber intervenido

mucho más deprisa de lo que lo hicimos para rescatar a las víctimas derrotadas. Pero la historia de las intervenciones políticas, frente a las humanitarias, sugiere que existen buenas razones para hacer esta distinción.

El mismo argumento restauracionista se aplica, de forma más obvia, al estado víctima, que probablemente no será un bastión de delicadeza y debilidad (como en el caso del imperio etíope de Haile Selassie, invadido por los italianos fascistas). El régimen de Kuwait era superior al de Irak, pero no existen muchos países que hubiesen acudido en su defensa, incluso hoy, si se tuviera que haber enfrentado a un golpe de estado, e incluso se habría recibido con entusiasmo una revuelta popular. El objetivo de la guerra no era otro que restaurar este régimen, el despotismo semifeudal de la familia al-Sabah. Lo que ocurrió a posteriori fue (es) el desarrollo del negocio de los propios kuwaitíes, libres frente a la coerción de los ejércitos enemigos. No están libres, no obstante, de la presión diplomática o la vigilancia de los derechos humanos.

Pero los únicos objetivos de la Coalición no eran la destrucción del poder militar iraquí y revertir la agresión – o por lo menos, no los únicos objetivos de Estados Unidos en su papel de organizador y líder de dicha Coalición-. Nuestro gobierno pretendía también un “nuevo orden mundial” en el que su papel de líder – presumiblemente- fuese mantenido. Una crítica habitual que se hizo a la guerra era que Estados Unidos tenía motivos imperialistas: el orden mundial escondía un deseo de influencia y de poder en el Golfo, una presencia estratégica y un control sobre el intercambio de crudo. Supongo que este tipo de razones jugó un papel importante en la decisión estadounidense: incluso las guerras justas responden tanto a razones políticas como morales – y las seguirán teniendo, espero, hasta la era mesiánica donde la justicia existirá por su propia razón. Una motivación única, un buen deseo, es una ilusión política. Ocurre lo mismo en la política interior de los estados, donde asumimos como natural que los partidos y los grupos que luchan por los derechos civiles o la reforma del bienestar lo hacen porque sus miembros tienen ciertos valores y también ciertas ambiciones – de poder y de cargo por ejemplo-. Parece fácil aceptarlo porque no están matando a otras personas. Pero las motivaciones de diversa naturaleza son también algo normal en las políticas internacionales, y suponen un problema moral en tiempos de guerra sólo si pretenden ampliar o prolongar la lucha más allá de los límites justificados o si distorsionan la conducta de la guerra.

Es perfectamente posible, entonces, apoyar una guerra dentro de unos límites justificables, y oponerse a las razones añadidas que éste gobierno o aquél tienen para luchar. Alguien podría abogar por la derrota de la agresión iraquí y al mismo tiempo, criticar el carácter de nuevo orden mundial. Lo más importante es insistir en que, tanto si hay un nuevo orden como si no, la guerra permanece como una guerra limitada.

El segundo límite tiene que ver con la conducta – el compromiso diario de las fuerzas armadas-. Sus características encuentran una mejor discusión en el contexto de la campaña aérea contra Irak, dado que la guerra sobre el terreno, en un espacio desértico, se acerca más al paradigma de la guerra justa concebido como combate entre combatientes (aunque todavía subyace la cuestión sobre cuándo y cómo un combate de este tipo debería alcanzar un alto al fuego). La respuesta militar de la coalición a la invasión de Irak sobre Kuwait comenzó con un ataque aéreo, y se desarrolló fundamentalmente utilizando aviones y misiles durante cinco semanas. Esta guerra aérea fue descrita por los oficiales estadounidenses en ruedas de prensa y comunicados, utilizando un lenguaje que combinaba la terminología tecnológica y la teoría de la guerra justa. Nos dijeron que se trataba de una campaña militar dirigida con una precisión sin precedentes, sobre objetivos militares. Las bombas eran “inteligentes” y los pilotos sensibles desde un punto de vista moral.

El esfuerzo por limitar el número de víctimas civiles resultaba de directrices claramente definidas: los pilotos tenían la orden de volver a las bases militares con las bombas y los misiles intactos, en aquellos casos en los que no hubiesen sido capaces de atacar los objetivos asignados. No debían lanzar sus bombas en los alrededores de sus blancos, ni tampoco apuntar libremente a objetivos que pudieran ser considerados como “objetivos oportunos” (excepto en zonas de batalla específicas). En el momento del combate, ellos mismos tenían que asumir riesgos para reducir así la posibilidad de causar “daños colaterales” a la población civil. Esto es lo que nos dijeron, y suponemos que también los pilotos recibieron dichas instrucciones. Los primeros estudios realizados, después de la guerra, sugieren que no siempre se cumplieron estas órdenes, que frecuentemente se lanzaron estas bombas desde alturas mucho mayores. Pero la política, si se trataba de ésta, era la correcta. Parece que las bajas civiles directas fueron relativamente bajas: al menos en este sentido, la guerra aérea no tenía precedentes.

El caso es muy diferente si no miramos al propósito de la política sino a los objetivos designados por ella. La coalición decidió (o los altos cargos estadounidenses decidieron) que la infraestructura económica de la sociedad iraquí – toda ella – era, legítimamente, un objetivo militar: los sistemas de comunicación y transportes, las redes eléctricas, los edificios gubernamentales de cualquier tipo, las presas de agua, y las plantas potabilizadoras. Nada nuevo en este sentido. El bombardeo estratégico durante la Segunda Guerra Mundial tenía un enfoque parecido, aunque no considero que existiera un esfuerzo sistemático para acabar con el agua potable de los alemanes o japoneses; quizás porque esto no era factible en los años 40. La selección de objetivos contra la infraestructura tiene una justificación fácil: los puentes sobre los que se transportan los suministros para el ejército en el campo de batalla son un buen ejemplo. Pero la electricidad y el agua, ésta última más claramente, son como la comida: son necesarios para la supervivencia y las actividades diarias de los soldados, pero son igualmente necesarias para el resto de la gente. Un ataque de estas características es entonces un ataque contra toda la sociedad civil. En este caso son los efectos militares, si es que hay alguno, los que podrían ser considerados como “colaterales”. El efecto directo de la destrucción de las centrales eléctricas y las plantas potabilizadoras de agua, por ejemplo, suponía imponer a los ciudadanos de las áreas urbanas (e Irak es una sociedad altamente urbanizada) el riesgo de contraer enfermedades y epidemias de considerables proporciones.

Los ataques de este tipo sugieren que la guerra no estaba sólo planeada para lograr la “restauración” - la liberación de Kuwait y la derrota del poder militar iraquí-. El objetivo añadido – aunque nunca explicitado - era probablemente la caída del régimen Baatista, que no sólo parecía incapaz de defender su propia conquista (expansión sobre territorio extranjero) sino también de proteger su propia población. Pero este propósito es injusto como lo son los medios para conseguirlo.

De hecho, incluso si tuviéramos justificación para derrocar el régimen, se nos habría prohibido esta cruel estrategia – quebrantar la sociedad iraquí para generar una desesperada rebelión de sus miembros. Habría sido mejor una expedición sobre Bagdad. Un disidente iraquí en el exilio, después de la guerra, argumentaba que dado que habíamos soliviantado la sociedad iraquí, estábamos obligados a marchar sobre Bagdad e instalar un régimen democrático capaz de organizar su reconstrucción. No dudo que obligaciones de este tipo pueden

derivarse de acciones de guerra erróneas. La dificultad de este particular ejemplo es la terrible pretensión de la empresa. El éxito era improbable de cualquier forma, y los posibles costes humanos elevados (pero, ¿cuántas vidas vale un Irak democrático?, es otra “proporción” que no se puede estimar).

Existen otros aspectos de la conducta de la guerra que invitan a la crítica y que de hecho la han recibido - principalmente, el uso de un arma nueva, las FAE bombas contra los soldados iraquíes, y los ataques aéreos, en los últimos días del combate, sobre lo que no sólo parecía una retirada del ejército sino una desorganizada retirada del mismo. La teoría de la guerra justa, tal y como la entiendo, no contempla situaciones de este tipo, donde sólo los soldados son los que están siendo atacados. Los soldados que huyen, a diferencia de aquellos soldados que quieren rendirse, son considerados como objetivos legítimos: pueden estar esperando su vuelta a la lucha en cualquier otro momento. En este caso, los soldados iraquíes que lograron escapar sí lucharon después contra ciudadanos rebeldes. Aquí surge una vez más una difícil cuestión para los teóricos de la proporcionalidad: ¿deberíamos haber aniquilado a los soldados iraquíes que estaban en retirada para prevenir una posible masacre de los rebeldes iraquíes? Al final, los argumentos clásicos de la guerra justa se habrían venido abajo en caso de bombardear el caótico vuelo desde Kuwait, precisamente porque el ejército en retirada no suponía ninguna amenaza *excepto* para su propia gente.

Sin embargo, este último punto no plantea realmente la intranquilidad suscitada por el espectáculo de las últimas horas de la guerra, o el alivio que suscitó el alto al fuego decretado por el presidente Bush, demasiado temprano según pensaron algunos generales. La justicia no representa toda la moralidad. Alguien podría oponerse a matar en la guerra, incluso en una guerra justa, cuando resulta demasiado fácil. Un “juego de disparos” no es un combate entre combatientes. Cuando el mundo se divide radicalmente entre aquellos que bombardean y aquellos que son bombardeados, la guerra se convierte en un problema moral, incluso si en un caso u otro el bombardeo pudiera estar justificado.

La teoría de la guerra justa todavía cumple una función importante en este sentido, haciendo posible defender algunos actos de guerra y condenar otros. Tampoco los líderes políticos y militares pueden librarse de rendir cuentas, proclamando que los actos por los que deberían ser condenados estaban de alguna

forma ligados a la guerra, eran inevitables tan pronto como comenzó la guerra. Dichos actos requirieron una decisión independiente por parte de un grupo de estrategias militares sentados alrededor de una mesa, discutiendo sobre lo que debería hacerse - y posteriormente, fue necesaria una decisión por parte de los políticos, sentados alrededor de una mesa, discutiendo sobre las recomendaciones de los estrategas. Es bastante fácil imaginar la Guerra del Golfo sin el ataque a objetivos de la infraestructura del país. Uno podría haber dicho que el propósito de la teoría de la guerra justa es convertir dichas posibilidades en algo obligatorio.

IV

Pero si estamos imaginando versiones del mundo diferentes de la que acabamos de experimentar recientemente, ¿por qué no imaginar un mundo sin guerra? Éste no es sólo, o principalmente, un sueño pacifista o mesiánico, el cordero conviviendo con el león. En una de sus formas, la teoría de la guerra justa aboliría la guerra por el simple (teóricamente) método de llamar injustos a los crímenes de guerra y guerras justas a las acciones policiales. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que los chinos denominan la "rectificación de los nombres", pero en la práctica presupone una exhaustiva transformación de la sociedad internacional. Antes de que pueda haber acciones policiales debe haber policía, y antes de que haya policía debe haber una autoridad global capaz de organizar y desplegar dicho poder policial. Las Naciones Unidas no tienen esta capacidad, ni se me ocurre que ninguno de sus miembros deseara asignar a esta organización internacional una fuerza policial comparable a la del ejército de la coalición destinada para la Guerra del Golfo. En principio, supongo que dicha fuerza no sería creada por varios motivos: la policía refuerza la ley y suprime el crimen, y eso es todo lo que se supone que hace. En la práctica, sin embargo, la policía refuerza la ley de forma selectiva, y ha sido utilizada, como muchos ejércitos, para hacer también otros trabajos. Una autoridad global, que reclamase el uso legítimo de la fuerza, no resultaría menos amenazadora que un estado imperial.

Lo que tenemos en cambio es una organización que autoriza a sus miembros a usar la fuerza (la Guerra de Corea es el precedente, la Guerra del Golfo sólo es el segundo caso), pero que no la usa ella misma. Dado que cualquier estado puede acudir, legítimamente, en auxilio de una víctima de agresión, esta autorización añade muy poco al argumento moral, incluso al legal. Juega quizás un papel político

y pedagógico: cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas confirma que este país, invadido por su país vecino, es efectivamente una víctima de agresión, convierte las operaciones de rescate en algo más sencillo; y cuando condena la invasión, permite una desaprobación general, que puede tener cierto efecto disuasorio. Pero confirmaciones y condenas de este tipo son en el mejor de los casos inciertas. La maquinaria de Naciones Unidas hizo todo lo que se podía esperar, de la mejor manera posible, en favor de los kuwaitíes; no sirvió de nada para la población del Tíbet, entre otros muchos casos. E incluso cuando funciona, la ayuda mutua, la autoayuda y la seguridad colectiva de tiempos pasados siguen siendo necesarias para combatir cualquier agresión.

Obviamente, sería algo positivo si cualquier acto de agresión fuera condenado por Naciones Unidas, y si después fuera posible resistido política y económica, y si fuera necesario, combatido militarmente por una coalición de países. De hecho, esto sólo sucederá cuando un número suficiente de estados tengan razones propias para votar a favor de la condena y unirse a la coalición. Pero no existe razón alguna para oponerse a la resistencia – como si el haber fracasado a la hora de rescatar a los tibetanos implicara que ahora debemos rendirnos a la hora de rescatar al pueblo kuwaití, arguyendo una razón de índole moral-. Los críticos tienen que argumentar en pro de una política coherente, es decir, la teoría de la guerra justa, con sus propias definiciones de agresión y legítima defensa y ayuda mutua, y debería aplicarse imparcialmente en todas las sociedades, en los estados de los críticos y en todos los demás. Estas aplicaciones prácticas serían sin duda más atractivas si también fuera posible determinar los límites de sus medios y fines prácticos, estar seguro de que las guerras que justificamos se luchan por razones justas. De esa forma, los estados también se convertirán en agentes en quien confiar, y por esta razón la discusión sobre la guerra y la justicia es todavía una necesidad moral y política.

Traducido por **ISABEL CORTINA y ELSA GONZÁLEZ**

Michael Walter, *Just and Unjust Wars. A moral Argument with Historical Illustrations*, Basic Books, 2nd. Edition, April 1992.